

006/2025

I

La Orden Ministerial sometida a Informe se compone de 16 artículos, distribuidos en 3 títulos, 2 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria, 3 disposiciones finales y 5 anexos.

En dicha norma se definen las funciones y las limitaciones de los instructores y las instructoras de tiro para personal de seguridad privada, y se regulan las normas bajo las que éstos deberán desarrollar sus cometidos durante la práctica de los ejercicios de tiro. Asimismo, se especifican los requisitos necesarios para poder participar en las pruebas de selección para obtener la habilitación de instructor o instructora de tiro y una vez superadas las mismas solicitar la tarjeta de habilitación, así como se regula la renovación de la habilitación, su suspensión temporal y pérdida.

Tal y como resulta de su Exposición de Motivos, el art. 21 de la ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada (ley 5/2014) establece una obligación legal para las empresas de seguridad privada consistente en d) *Garantizar la formación y actualización profesional del personal de seguridad privada del que dispongan y del personal de la empresa que requiera formación en materia de seguridad privada. El mantenimiento de la aptitud en el uso de las armas de fuego se hará con la participación de instructores de tiro habilitados*

Establece por tanto la ley una obligación de formación y actualización profesional del personal de seguridad privada que recae en las propias empresas; y el mantenimiento de la aptitud en materia de armas de fuego se establece que se haga necesariamente con la participación de los llamados “instructores de tiro”, para los que la ley establece la necesidad de una “habilitación”. Una obligación similar resulta del art. 26 del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, al requerir la “competencia acreditada” de estos profesionales.

La citada ley 5/2014, en su art. 12, dentro de las competencias de la Administración General del Estado, en su apartado 2, letra b), establece que *corresponde a la Dirección General de la Guardia Civil el ejercicio de sus competencias en materia de armas sobre las empresas y el personal de seguridad privada,*

En consecuencia, la norma establece una obligación legal de las empresas y una misión de interés público o ejercicio de poderes públicos para la Administración (Guardia Civil), lo que desde la perspectiva de la normativa de protección de datos personales se constituye en una base lícita para el tratamiento de datos personales conforme al art. 6.1.e) RGPD, siendo necesario del tratamiento de los datos personales para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (art. 6.3 RGPD).

Los tratamientos de datos personales habrán de tener una base lícita para el tratamiento de estos, pero además en todo caso habrán de cumplir con los principios del art. 5 RGPD, lo que supone, entre otros, que sólo podrán ser objeto de tratamiento aquellos datos que sean adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados («minimización de datos»).

Sobre estas bases se procederá a analizar el texto del proyecto.

II

En primer lugar, el art. Decimotercero establece que para la expedición de la tarjeta de habilitación se verificarán los datos de carácter personal aportados por los/las solicitantes. Esta misma comprobación se realizará en los casos de suspensión temporal o pérdida, especificados en los puntos siguientes, y también en los casos de renovación de la habilitación.

Esta AEPD entiende que esta referencia no es más que la plasmación de la necesidad de realizar el tratamiento de los datos personales para el otorgamiento de la habilitación profesional y la tarjeta correspondiente. Ahora bien, como es obvio, no es esta la única actividad en que se tratarán los datos personales de los interesados, pues la inscripción en el centro de formación autorizado para superar la formación previa exigida por la norma (art. Quinto), la apertura de los propios centros de formación (si el promotor/titular es persona física) (art. Sexto); la acreditación de los profesores de dichos centros por la Comisión de Valoración del Profesorado prevista en el art. Octavo; o la expedición de las acreditaciones del profesorado de los centros de formación para la habilitación de instructor o instructora de tiro (art. Noveno), o la verificación de los requisitos para obtener la habilitación (art. Undécimo), etc. son todos, en definitiva, tratamientos de datos personales necesarios para llevar a cabo las actividades que se establecen en dichos preceptos.

Por ello, y sin ser estrictamente necesario, porque los tratamientos de datos que se lleven a cabo en cumplimiento de esta norma están sujetos al RGPD y

LOPDGDD (art. 2 LOPDGDD), se sugiere que, no sólo para los tratamientos de datos a que se refiere el art. Decimotercero, sino para todos los tratamientos en general derivados de esta norma, se incluya una Disposición, que podría ser adicional, en la que se establezca precisamente esta circunstancia, y que podría tener la siguiente redacción:

“Todos los tratamientos de datos de carácter personal derivados de la aplicación de esta Orden Ministerial, se realizarán con estricta sujeción a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, garantizando el derecho fundamental de los afectados a la protección de sus datos de carácter personal”.

III

En el Anexo III y IV del proyecto se establecen el modelo de solicitud para la expedición de la tarjeta de habilitación de instructor de tiro y su renovación, respectivamente.

A este respecto, en primer lugar, esta AEPD considera que la revelación del teléfono del interesado, si esta es considerada obligatoria, es un tratamiento excesivo de datos personales. El interesado no está sujeto, salvo en los casos que lo estableciera una ley, lo que no parece ser el caso -ni tampoco se razona al respecto en la Orden o anexos- a proporcionar su número de teléfono a la Administración ni a ser contactado a través de esta vía. Por ello dichos datos debería de ser eliminado del modelo de solicitud.

En segundo lugar, se establece en ambos modelos de solicitud que: *Conforme al artículo 28 de la Ley 39/2015, **se van a consultar los datos exigidos y necesarios para la tramitación de este procedimiento** o para la concesión, renovación y mantenimiento de la licencia, permiso o autorización solicitada y que se encuentren en poder de cualquier otra Administración, salvo que usted se oponga expresamente a ello. **Si se opone a dicha consulta, deberá escribir el texto “ME OPONGO” en la línea al final de este texto.** En caso de oponerse a su consulta u obtención y no aportar los mismos al procedimiento, se le tendrá por desistido de su petición de conformidad con el artículo 68 de la Ley 39/2015.*

Esta AEPD estima que debería de reconsiderarse la redacción. El art. 28 de la ley 39/2015 no habla de consulta de “datos”, sino de “documentos” que ya se encuentren en poder de la Administración. La redacción debería de acomodarse a la ley, ya que ambos conceptos no son similares. Por otra parte, ni siquiera se dice cuáles son esos documentos (o datos) que debería de aportar el solicitante para evitar que se le considere desistido de su petición.